



ALBOAN

NO SOMOS INOCENTES

MARLEN EIZAGUIRRE, TÉCNICA DE ALBOAN Y EL GRUPO DE SEGUIMIENTO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PARA UNA CARTA DE JUSTICIA Y SOLIDARIDAD CON LOS PAÍSES EMPOBRECIDOS

Tres años después de la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (I.L.P.) para crear una Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos, no sabemos si se ha cumplido o no. Solo tenemos la 'intuición' de su incumplimiento y de la falta de interés político por hacer que ésta se cumpla. Las informaciones conseguidas por Wikileaks y la historia de persecución de Julian Assange han ocupado los medios de comunicación estas últimas semanas. Resulta lamentable que el debate haya estado centrado en la figura de Assange, y concretamente en las supuestas imputaciones de carácter sexual y en los 'cotilleos' del cuerpo diplomático sobre los diferentes liderazgos en el mundo.

Al igual que Wikileaks, nuestro interés está centrado en el acceso a la información para todas las personas con el fin de hacer de éste un sistema en el que la libertad de expresión y la participación sean una posibilidad real de contribuir de manera efectiva al bien común. Queremos tener acceso a la información, a toda la información: la que nos pueda proporcionar Wikileaks y la que nos deben proporcionar las instituciones que nos gobiernan. Pero nos encontramos con una falta de transparencia tanto por parte de las instituciones públicas como de las grandes empresas privadas, lo que hace que no tengamos acceso en nuestra vida cotidiana a la información disponible para conocer cómo se están desarrollando las propuestas municipales, forales o autonómicas.

En estos tiempos de Presupuestos tenemos un acceso, más bien limitado, a los debates en torno a los grandes rubros. Pero no a los 'cierres de año' de las instituciones. Es importante el Presupuesto, pero también es importante conocer la ejecución del mismo. En países como Perú, la página web del Ministerio de Economía y Hacienda tiene actualizados al día los gastos de ejecución presupuestaria del año; de este modo, las personas o entidades pueden dar seguimiento a los temas que más les interesan.

En nuestro contexto, por un lado se abren espacios para una democracia más participativa y más plena, pero por otro no se da poder a las personas e instituciones. El Gobierno Vasco apoya el 'gobierno abierto', las instituciones fomentan la participación. Pero cuando las personas y organizaciones tomamos la iniciativa en esa participación, nos vemos frustradas.

Hace siete años se presentó ante el Parlamento Vasco la **Iniciativa Legislativa Popular para crear una Carta de Justicia y Solidaridad con los Países Empobrecidos**. Fueron 45.254 firmas representando a otras tantas ciudadanas y ciudadanos que proponían la instauración de un dividendo de paz, la introducción del comercio justo en las entidades públicas y la abolición de la deuda externa. Tuvieron que pasar cuatro años desde la presentación de esta iniciativa para que se debatiera en el Parlamento. El tema que mayor debate generó fue el de la abolición de la deuda externa. La argumentación no giró tanto en torno a los contenidos, sino a si esto era competencia o no del Parlamento Vasco. Finalmente, el día 28 de diciembre de 2007 la iniciativa fue aprobada.

Continuar vendiendo armas a países empobrecidos, no apostar por unas relaciones comerciales más equitativas y hacer que los pueblos de los países más empobrecidos tengan que pagar deudas contraídas por gobiernos para beneficiar, en la mayoría de los casos, a empresas privadas, contribuye a incrementar las injusticias del mundo, la muerte y la pobreza. Las propuestas que aparecen en la Iniciativa Legislativa Popular quieren contribuir a la construcción de unas relaciones comerciales más justas y a una disminución del armamento.

El Día de los Inocentes se cumplieron tres años de la aprobación de esta ley y, aunque los datos con los que contamos son pocos, todo indica que no se está cumpliendo. La participación que se ha posibilitado a la ciudadanía ha sido muy limitada y mediada por los partidos políticos y ahora no contamos con la información accesible para saber si se está cumpliendo o para sugerir propuestas de acción sobre datos concretos. Que la democracia sea el menos malo de los sistemas que conocemos no nos tranquiliza. Queremos poder participar más activamente, para lo cual necesitamos acceso a la información de forma que la podamos entender; poder plantear cuestiones sobre las temáticas que nos interesan y tener respuestas; y poder seguir realizando propuestas.

A la espera de una ley de transparencia y acceso a la información, las instituciones públicas podrían comenzar a dar cuenta a la ciudadanía sobre lo que ha pasado con esta iniciativa popular que se

transformó en una ley aprobada. Solicitamos saber qué se ha puesto en marcha y, si no se ha realizado nada, qué medidas pretenden tomar.

La credibilidad de nuestro sistema democrático está en juego. Pero, más importante, esta dejación por parte de nuestras instituciones está contribuyendo a la muerte de muchas personas y al fomento de un sistema de relaciones comerciales injusto que solo genera injusticias. En nuestras manos está el que personas inocentes puedan tener acceso a una vida digna y justa. No somos inocentes y tampoco queremos que nuestras instituciones nos tomen por inocentes. Que se cumpla esta ley es de justicia.